



Papeles el tiempo de los derechos

“Sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe”

Silvina Ribotta

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid

Palabras clave: América Latina y el Caribe - pobreza – pobreza extrema - desigualdad – hambre – justicia- Objetivos del Milenio -



Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe.

Silvina Ribotta¹

1.

América Latina y el Caribe es un continente poblado de riqueza natural, con extensas selvas y fértiles llanuras, amplias costas y zonas marítimas, abundantes ríos y las más grandes reservas de agua potable del mundo, grandes yacimientos de minerales, de petróleo y de gas. Pero es también el continente más desigualitario del mundo, con mayores concentraciones de riqueza en pocas manos y altísimos niveles de pobreza extrema. Con una historia plagada de imperialismos y genocidios coloniales y de imperialismos y violaciones a los derechos humanos contemporáneos (que explican, al menos en parte, el estado actual de los procesos políticos y económicos latinoamericanos), los pueblos de América Latina están atravesando uno de los momentos más relevantes en la consolidación de sus modelos democráticos mientras los sacuden los violentos efectos de la última crisis financiera internacional. Y surgen, entonces, muchas preguntas: ¿Cómo enfrenta este continente los desafíos políticos y económicos que se le presentan para fortalecer sus procesos democráticos garantizando no sólo los derechos individuales y políticos a sus ciudadanos, sino también los económicos, sociales y culturales? ¿Cómo se aborda desde el continente más desigual del mundo los problemas de pobreza y de hambre? ¿Cómo es la pobreza latinoamericana y cuáles son las paradojas de desarrollo que se le presentan?

Pero se ha dicho y escrito tanto sobre la pobreza que, paradójicamente, se ha empobrecido el concepto y ya parece que no describe nada. Aunque la realidad nos indica precisamente lo contrario, que la pobreza sigue siendo un fenómeno social alarmante en todo el mundo, y que las personas siguen viviendo en situaciones de pobreza, enfermando por pobreza y muriendo por ser pobres. Es necesario, pues,

¹ **Silvina Ribotta, Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.** E-mail: silvina.ribotta@uc3m.es. Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”, CSD2008-00007.

replantearnos qué es la pobreza y qué implica ser una persona pobre o empobrecida y cuáles son las consecuencias y el impacto de la pobreza en los debates sobre la justicia.

La pobreza como fenómeno sociológico, económico, antropológico, cultural e histórico ofrece matices de análisis muy variados y es una fuente inagotable de debates y discusiones a nivel conceptual, sobre las diversas formas de medirla y valorarla, y respecto a las praxis y abordajes sociales. Pero de lo que no caben dudas es sobre sus efectos, ya que los hechos se encargan de mostrarnos su dureza sin contemplaciones.

La pobreza produce exclusión y marginación, sufrimientos, hambre, desnutrición y enfermedades, limita las libertades y las oportunidades sociales, impide o limita el acceso a la educación y a la cultura, condena a viviendas inadecuadas, condiciones insalubres de vida e inseguridad en el entorno, ocasiona o profundiza discapacidades, provoca violencia y conflictos armados, excluye de la participación democrática y ciudadana, aumenta gravemente la vulnerabilidad y, sigilosa pero invariablemente, mata. Cada día, la pobreza se cobra la vida de 25.000 niños. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, el número de personas que padecen hambre en todo el mundo es 963 millones, lo que implica un 14,6 por ciento de la población mundial estimada en 6.600 millones de personas. De estos casi mil millones de personas que sufren hambre, 642 millones viven en Asia y el Pacífico, 265 millones en África subsahariana, 53 millones en América Latina y el Caribe, 42 millones en Medio Oriente y el Norte de África y 15 millones en países desarrollados.

Pero, ¿qué es lo que esta situación implica en términos de justicia? ¿Cómo impactan estas cifras en las teorías de la justicia? O, ¿cómo se aborda esta situación en términos conceptuales? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza, de desigualdad, de justicia?

2. Los números de la pobreza y la desigualdad en AL y el Caribe

Históricamente los mayores niveles de pobreza y desigualdad económica se han registrado en América Latina y África, y la situación se ha agravado desde 1980. Una de las características que distinguió las formas de desigualdad dentro de los países de América Latina respecto a otras regiones en el decenio de 1990, es que la parte del total de ingresos que correspondía al 10% más rico de los hogares representaban más del 30% del total de ingresos, llegando en algunos casos hasta concentrar el 45% de los ingresos totales, mientras al 40% más pobre de los hogares de América Latina le correspondía sólo entre el 9% y el 15% de los ingresos totales. Respecto al África Subsahariana, el número de pobres aumentó en casi 90 millones en poco más de 10

años, entre 1990 y 2001. En Europa y Asia Central la cantidad de personas que viven con menos de 1 dólar al día aumento en 14 millones de 1981 a 2001.

América Latina y el Caribe es el continente más desigual del mundo y uno de los más empobrecidos, pero la crisis financiera internacional le llegó especialmente en un mal momento. Aunque, visto en perspectiva, fue un buen momento para recibir un golpe tan duro en términos de poder afrontar mejor la situación general adversa. América Latina y el Caribe se encontraba precisamente en un período de moderado crecimiento que tenía desde el 2002-2003, quizá el más relevante desde la década del 70 y que se extendió hasta mediados del 2008. Como afirma la CEPAL, el 2008 fue el último de los 6 años de relativa bonanza que venían experimentando los países de América Latina y el Caribe y que se tradujo en disminución de la pobreza y la desigualdad alcanzando la tasa de pobreza en 2008 un 33%, 11 puntos porcentuales menos que en 2002, de los cuales un 12,9% vivía en condiciones de pobreza extrema o indigencia, lo que redujo el número total de personas pobres en 21 millones y en 26 millones el número de personas indigentes. Igualmente, estos porcentajes implicaban 180 millones de personas pobres y 71 millones de indigentes.

La composición de la pobreza en Latinoamérica tiene un carácter eminentemente urbano, un 66% de las personas pobres viven en áreas urbanas. Pero en 2008 la pobreza rural era el doble que la pobreza urbana y la indigencia el triple, lo que implica que la gran mayoría de los pobres de zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema o indigencia, a diferencia de las áreas urbanas, pero es en estas últimas donde hay más concentración de personas. La mayor cantidad de personas, y de personas pobres, viven alrededor de las grandes ciudades, lo que reafirma el carácter esencialmente urbano de la pobreza latinoamericana pero, a su vez, la mayor cantidad de personas que viven en los ámbitos rurales son pobres. Hay más cantidad de pobres en las áreas urbanas o, mejor dicho, alrededor de las grandes ciudades, los llamados *cinturones de pobreza*, pero es más profunda y más extendida la pobreza en las áreas rurales.

Otra característica sobresaliente de la pobreza latinoamericana es la gran diversidad entre los países que la integran; ya que mientras Costa Rica, Uruguay y Chile (Argentina también se menciona entre estos países, pero con datos parciales porque sólo se refieren a las áreas urbanas) presentan tasas de pobreza inferiores al 22% y tasas de indigencia de entre un 3% y un 7%, hay otro grupo de países con pobreza media-baja como la República Bolivariana de Venezuela, Brasil y Panamá donde la tasa de pobreza es inferior al 30%. Pero hay otro grupo de países con tasas de pobreza media-alta como

Colombia, México, El Salvador, Perú y la República Dominicana (Ecuador también se menciona entre estos países, pero con datos parciales porque sólo se refieren a las áreas urbanas) con tasas de pobreza entre un 35% y un 48% y un grupo de países con tasas de pobreza e indigencia alta que superan el 50% y el 30% respectivamente integrado por El Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay.

De todas formas, América Latina y el Caribe es el continente más desigual del mundo, no el más pobre, sino el más desigual, donde se da la brecha más amplia y profunda entre pobreza y riqueza. Valgan algunos datos: el 10% más rico de los hogares concentra en promedio el 34% de los ingresos totales, aunque según los países también hay gran heterogeneidad. Desde los países más desigualitarios como Brasil y Colombia donde este valor bordea o supera el 40% hasta los valores más bajos que no exceden del 27% de la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay. Y, aunque las cifras más recientes reafirman una tendencia hacia una menos desigualitaria distribución del ingreso en algunos países, como la República Bolivariana de Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Paraguay, y en otros la tendencia es la de mayor concentración de riqueza como en Colombia, Guatemala, México y la República Dominicana, esto no altera el hecho de que la desigualdad en América Latina y el Caribe sigue siendo de las más altas del mundo.

Respecto a la desigualdad y para mostrar empíricamente la vinculación conceptual que antes expliqué sobre pobreza y desigualdad, valga mencionar que la CEPAL considera dos variables como relevantes para la explicación de las fluctuaciones en los niveles de pobreza y desigualdad en los países, y les llama el *efecto crecimiento* (relacionado al crecimiento del ingreso medio de las personas) y el *efecto distribución* (relacionado a los cambios en las formas en que se redistribuyen estos ingresos). El efecto crecimiento parece indispensable para una disminución de las tasas de pobreza, pero el efecto distribución ha probado en muchos países que es la clave (o al menos un buen comienzo) para disminuir los niveles de pobreza. Por ejemplo en Bolivia, Honduras, Venezuela, Uruguay, Chile, Costa Rica y Panamá la redistribución de ingresos jugó un papel importante contribuyendo en un 30%, al menos, en la reducción de la pobreza.

Para estas fluctuaciones en las tasas de pobreza la CEPAL valora como muy relevante lo que suceda en el mercado laboral ya que estima que la mayoría de los ingresos monetarios de que disponen las familias, sean pobres o no, provienen del mercado laboral. Con lo cual la suerte que éste corra impacta decisivamente sobre las

tasas de pobreza e indigencia de un Estado. En líneas generales, entre el 2002 y el 2008 hubo un marcado mejoramiento del mercado laboral en América Latina y el Caribe acompañado de una reducción del desempleo y, en algunos países, con un aumento del ingreso laboral por persona ocupada.

Sin embargo, la desigualdad en América Latina y el Caribe no sólo es una realidad empírica sino que existe en la percepción de los ciudadanos de las actuaciones políticas y del Estado, especialmente en la desigualdad frente a los ciudadanos ligados al poder político y económico. Venezuela es el país donde más mejoraron los indicadores de justicia en la distribución del ingreso. Entre 1997 y 2007, el porcentaje de población que cree que la distribución del ingreso en la República Bolivariana de Venezuela es justa/muy justa se elevó en 42 puntos porcentuales y disminuyó en -26 puntos el porcentaje de población que la considera injusta. Algo similar ocurre en Bolivia, Ecuador y Brasil. La CEPAL entiende que estas adhesiones a modelos e Estado en Venezuela, Bolivia (especialmente desde 2006), Ecuador o Brasil están vinculadas a que en estos países disminuyó la concentración del ingreso entre 1997 y 2007, mejoraron los indicadores de pobreza y se realizaron políticas de redistribución. Otra variable importante tiene que ver con el apoyo de movimientos sociales a los cambios políticos y económicos seguidos por estos Estados y, muy relevante también, concretamente en Brasil y Bolivia, al origen social del jefe de gobierno, que despertaban mayor empatía en la ciudadanía excluida. En América Latina y el Caribe, en general, hay una gran desconfianza en la función de los gobernantes y una percepción de que coadyuvan a los intereses de las élites en detrimento de los del resto de la ciudadanía, que es muy complejo de revertir, pero que pasa, esencialmente, por experiencias cercanas a la venezolana o boliviana. En este mismo sentido, Naciones Unidas en su último reporte sobre la situación social del mundo 2010, recuerda que en muchos países donde los indicadores de desempeño social, como la salud y la educación superaron las expectativas basadas en el nivel del producto nacional bruto per cápita, estos resultados se lograron a través de políticas de transformación social, como en China, Costa Rica, Cuba, el Estado de Kerala en la India, Sri Lanka y muchos antiguos países socialistas. Y llama la atención de que estas políticas holísticas, multidimensionales, inclusivas y universalistas pueden ofrecer lecciones a los países en desarrollo que luchan por superar la pobreza en sus diversas dimensiones. Y más aún cuando muchas de las transformaciones sociales más importantes se lograron a pesar de los bajos niveles de renta media.

Igualmente, los datos generales de pobreza y desigualdad se modifican agravando su poder empobrecedor y excluyente cuando se entrecruzan con otras variables, como pobreza rural o urbana, dificultad o imposibilidad en el acceso a los servicios sanitarios, saneamiento, nutrición, vacunación y sistemas generales de prevención de enfermedades, inexistencia o graves carencias en los sistemas de salud y educación públicos y universales, distancia de los centros más poblados, inclusión/exclusión del sistema educativo o una educación deficiente e insuficiente, nivel educativo de los padres, factores climáticos y ambientales, pertenencia a pueblos indígenas, condiciones sociales discriminatorias como discapacidades o enfermedades, cuestiones de género, guerras y/o conflictos armados, violencia social, bloqueos comerciales, desempleo, subempleo y trabajo infantil, prevalencia de determinadas enfermedades como VIH/SIDA, malaria o paludismo, cólera, mal de chagas, entre otras. Como se observa en otros escenarios, la pobreza se ensaña aún más con mujeres, niños y grupos étnicos, que siguen siendo los más vulnerables a situaciones de pobreza e indigencia, y esta situación se ha incrementado en América Latina y el Caribe en el lapso 2002-2008. Edad, sexo, etnia y condición social son factores agravantes de discriminación que profundizan las situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión que viven los latinoamericanos y latinoamericanas.

La incidencia de la pobreza entre los niños menores de 15 años, en general, excede en promedio en 1,7 veces la de las personas mayores de esa edad, aunque esta diferencia en la incidencia de la tasa de la pobreza tiende a disminuir a medida que aumenta la extensión de la pobreza de un país. Con lo cual, no es de extrañar que los países con menor grado de infantilización de la pobreza sean justamente los países con mayores tasas de pobreza, pese a que también es posible que países con tasas de pobreza similares presenten diferencias respecto a la infantilización de la misma. De todos modos, entre 1990 y 2008 la pobreza infantil se redujo en un grado menor que como vimos se había reducido la pobreza de los adultos y la relación entre pobreza de niños y de adultos aumento en todos los países de la región, especialmente en Brasil, Panamá y Uruguay.

La pobreza también afecta de manera diferenciada a hombres que a mujeres, con lo que las mujeres de todo el mundo multiplican la exclusión a la que les condena la pobreza por el hecho diferencial de ser mujeres, y la discriminación se agrava más si es negra o indígena, y más aún si tiene una discapacidad. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe presentan un índice de feminidad de la pobreza superior a

1,0, aunque los valores más altos se dan en Argentina, Chile, Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y se han agravado en Chile y Uruguay en los últimos años. La inserción laboral de las mujeres es también sumamente estratificada, siendo más perverso este fenómeno en las mujeres pobres que sufren la doble vulneración de ser mujeres y pobres. Las mujeres trabajan más cantidad de horas y en trabajos no remunerados y sin garantías laborales ni reconocimiento, como el trabajo doméstico.

En general, con respecto al empleo y a la desesperación que trae aparejada el desempleo y la garantía de pobreza que implica, en el año 2000 se estimaba que había 175 millones de personas en todo el mundo -1 persona de cada 35- que había emigrado de sus países de origen, pobres o en vías de desarrollo, a los países desarrollados en busca de empleo y mejores oportunidades económicas. Pero, esta emigración no siempre les conduce a los trabajos buscados, como sucede con los miles de personas que mueren cruzando el muro que separa Estados Unidos de Norteamérica y México o cruzando el estrecho que separa el África pobre de la Europa próspera. Naciones Unidas calcula que anualmente se trafican entre 600.000 y 800.000 personas a través de las fronteras, y que este comercio internacional genera alrededor de 10.000 millones de dólares por año, lo que sólo es superado por el tráfico de drogas y de armas. El 80% de estas personas son mujeres y niñas y una gran mayoría terminan siendo explotadas en la industria del sexo o del trabajo doméstico.

Hay también una vinculación fuerte entre pobreza y la pertenencia a determinados grupos étnicos que se nota en todo el mundo y también caracteriza a la pobreza en América Latina y el Caribe. Concretamente, la tasa de pobreza de los grupos indígenas y afrodescendientes en esta región oscila entre 1,2 y 3,4 veces a la del resto de la población. Los pueblos indígenas son la población más excluida de América Latina y África, ahondando las situaciones de pobreza y desigualdad que se viven en los países o regiones que habitan. Exclusión que no sólo es económica, sino profundamente social. Los índices de pobreza entre la población indígena son más altos y mucho más complejos de revertir; ya que el *ser* indígena aumenta la probabilidad de una persona de ser pobre, porque tendrá que vencer la doble barrera de exclusión calificada. No podemos olvidar algunos genocidios contemporáneos a poblaciones indígenas, como el que sufrieron los mayas en Guatemala en el que murieron cerca de 200.000 personas.

Y, aunque no es posible establecer una relación causal definitiva entre pobreza y violencia, es posible identificar las profundas relaciones que existen entre los índices de

mayor violencia y su vinculación con los períodos de inestabilidad económica y pobreza de los países. Tomando los datos sobre homicidio como un indicador apropiado para medir la violencia de una sociedad, Naciones Unidas señala que los países con altos niveles de desarrollo humano presentan tasas de homicidios inferiores al promedio mundial mientras que aquellos con niveles elevados de homicidios -más de 10 por cada 100.000 habitantes- sucede en los países de ingresos medios, en desarrollo o pobres. Así, mientras que en América Latina y el Caribe los niveles de homicidios son muy altos, 25 por cada 100.000 habitantes, al igual que en África subsahariana, 17 a 20 por cada 100.000 habitantes, en la Unión Europea los niveles son muy bajos, menos de 3 por cada 100.000 habitantes. Por ello, sin hacer generalizaciones, lo que se observa es una fuerte correlación entre la desigualdad y el delito, que no entre la persona pobre y el delito, sino entre la situación o circunstancia de la pobreza y, concretamente, de desigualdad económica y social frente a las situaciones de riqueza con las que conviven y se enfrentan cotidianamente en casi todas las sociedades mundiales.

Del mismo modo, los conflictos armados condenan a un destino de mayor pobreza a los países que los sufren, y causan no sólo las muertes directas de la guerra sino también y mucho más numerosas son las muertes que se producen por las enfermedades -muchas de transmisión sexual-, las discapacidades -amputaciones, minas anti-persona, armas de destrucción masiva, etc.-, los niños y los ancianos que quedan huérfanos y desprotegidos, los niños y niñas soldado, los desplazamientos internos, la violencia social, y toda la situación de caos generalizado en el que se hunden los países en guerra, especialmente los países pobres o en vías de desarrollo. Desde 1990 los conflictos armados han costado la vida de 3,6 millones de personas, de los cuales más del 45% eran niños y niñas. Particular atención merece la situación de los niños y niñas soldado, aunque los datos oficiales son muy difíciles de obtener, se puede decir que todavía hay entre 350.000 y 500.000 menores de 18 años, niños y niñas, que están luchando como soldados, tanto alistados en fuerzas armadas de los gobiernos como en los grupos armados de oposición, en más de treinta países de todo el mundo.

Respecto a la prevalencia de determinadas enfermedades como VIH/SIDA, malaria o paludismo, cólera, mal de chagas, entre otras, que aunque no consideradas mortales en el mundo desarrollado en los países pobres se transforman en verdaderas pandemias, la situación es más que preocupante. El SIDA es ya la causa principal de mortalidad en todo el mundo para las personas entre 15 y 49 años. En el año 2003 murieron a causa del SIDA 2,9 millones de personas y 4,8 contrajeron el virus, y más

del 90% de las personas que actualmente conviven con el virus del VIH o están enfermos de SIDA viven en países pobres o en desarrollo. Y, para contrastar estos datos con los gastos prioritarios que realizan los países más ricos del mundo frente a lo que valoran como amenazas: el actual gasto en VIH/SIDA, una enfermedad que cobra 3 millones de vidas al año, equivale a 3 días de gasto militar. Y el VIH/SIDA vale sólo como un ejemplo, de alguna manera el más costoso; ya que para evitar o al menos paliar otras enfermedades como el paludismo, el mal de chagas o el cólera, asociadas estrechamente a escenarios de pobreza, se requieren mínimos cambios estructurales y de saneamiento, como mejorar el acceso al agua potable, realizar cambios en la infraestructura de las viviendas para evitar el ingreso de insectos o la permanencia de estos (como el mosquito para el paludismo o la vinchuca para el mal de chagas) y mejorar la nutrición y vacunación en las personas vulnerables.

Respecto a la educación, la exclusión del sistema educativo o una educación deficiente e insuficiente, se la puede considerar en un doble sentido: como otra relevante consecuencia de las desigualdades económicas y como una causa feroz de reproducción de la pobreza, y por consiguiente de la exclusión social y laboral y de las oportunidades de desarrollo y participación social en general. Una desigualdad que, a la vez, no afecta por igual en las áreas rurales que en las urbanas, ni a hombres y mujeres, ni a personas con discapacidad, ni a personas negras o indígenas. Actualmente hay más de 400 millones de adultos de países pobres y en desarrollo que nunca han asistido a la escuela y, en el caso de los que sí han ido sus escuelas eran considerablemente peores que las de los niños de Europa, Japón o los Estados Unidos, más deficientes e inferiores en calidad de enseñanza y de recursos humanos y materiales que en los países desarrollados. Sumado todo a una nutrición insuficiente, a la presión y necesidad de trabajar, al contexto desalentador, a la falta general de oportunidades, y en muchos casos en contextos de violencia y hasta de guerras, el resultado es un índice de fracaso escolar altísimo. Por todo, no resulta extraño que la situación mundial del empleo se caracterice también por una desigualdad extrema. Entre 1993 y 2003 el número de personas desocupadas aumento de 140 millones a la cifra récord de 186 millones, el 6,2% de la población activa total.

Luego de esta pintura general sobre las cifras de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe no hay lugar para dudas: estamos frente a una situación que no sólo es intuitivamente injusta, sino que resulta moralmente reprochable, económicamente ineficiente, y políticamente inaceptable.

3. Cuando el hambre es la más grande violación de derechos

¿Cuál es el debate que se está dando en la región sobre los criterios de justicia adecuados para abordar la situación y ofrecer una alternativa a la profunda injusticia social que se vive? ¿Es la pobreza el eje de la justicia social? ¿Le preocupa a la justicia acabar con la pobreza? Tengo serias dudas respecto al compromiso que la justicia y el derecho como tal, como teoría de la justicia, como teoría del derecho, como filosofía del derecho y como ciencia jurídica tienen respecto al tema de la pobreza. Basta mirar rápidamente en cualquier biblioteca de Derecho de cualquier universidad del mundo para comprobar que el problema de la pobreza no es el eje de los debates de la justicia. O, por ejemplo, constatar que el abordaje de la pobreza esta ausente en las grandes discusiones sobre el derecho y la justicia. Pero ¿por qué el derecho y la justicia omiten referirse a la injusticia más gravosa, más sangrante, a la más grande violación de derechos?

No hay dudas que la pobreza es una forma de opresión social y de violación de derechos, especialmente de derechos humanos; ya que siempre viene acompañada por la violación del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la libertad y todas sus manifestaciones, a los más básicos y relevantes derechos que acompañan la idea de dignidad humana. La pobreza es un ataque contra la propia supervivencia de lo humano y el ejercicio de sus libertades básicas e implica violencia económica sobre toda la sociedad, que aunque puede ser similar en sus efectos a la violencia física puede resultar aún más peligrosa que aquella.

Por consiguiente, la erradicación de la pobreza es un imperativo moral y ético, pero también es un imperativo jurídico. Naciones Unidas considera a la pobreza como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, opciones y capacidades, seguridad y poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Vivir una vida libre de pobreza y hambre es uno de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, que en su artículo 25.1. establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho que también es reafirmado en el *Pacto Internacional de*

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Igualmente, el 24 de agosto del 2006, la Sub-comisión para la promoción y la protección de los Derechos Humanos de la ONU, adoptó los principios rectores *Extrema pobreza y derechos humanos*, que luego avaló el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 2/2 del 27 de noviembre de 2006 sobre *Los derechos humanos y la extrema pobreza* afirmando que la lucha contra la pobreza debe seguir teniendo alta prioridad para la comunidad internacional y repitiendo que la pobreza es la negación de los derechos humanos, ya que en situaciones de miseria todos los derechos son violados. Reafirma que la extrema pobreza coloca a hombres, mujeres y niños y a grupos enteros de la población en una situación de violación de sus derechos y libertades fundamentales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. Situación que en algunas circunstancias puede constituir una seria amenaza al derecho a la vida, y que la reducción inmediata y la erradicación final de este fenómeno deben seguir siendo la primera prioridad para la comunidad internacional. Así lo entendió también la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, como cuando afirmó ya en 1981 que la extrema pobreza producto de la distribución desigual de la riqueza nacional había sido definida como una condición de vida tan limitada por la desnutrición, enfermedades, analfabetismo, índice bajo de longevidad y alto índice de mortalidad infantil, que se hallaba por debajo de cualquier definición racional de decencia humana. En la misma línea, Cançado Trindade afirma que el propio derecho a la vida, el más fundamental de todos los derechos, abarca necesariamente las condiciones de vida, y pertenece al mismo tiempo a la esfera de los derechos civiles y políticos como a la de los derechos económicos, sociales y culturales.

Pero más aún, el hambre y la pobreza no sólo son vistas como la más grande violación a los derechos, sino que también pueden ser interpretados como una tortura, trato cruel, inhumano y degradante. En efecto, la pobreza implica una violación de las más elementales normas de justicia social; ya que atenta contra los principios fundamentales de no discriminación e igualdad y vulnera el igual derecho a la realización a través del ejercicio de derechos civiles y políticos, y también económicos, sociales y culturales. Existe un *derecho a no ser pobre*, aunque no sea reconocido de esta manera a los fines de su exigibilidad, pero sí existen mecanismos judiciales para poder enfrentar situaciones de pobreza y mitigarla y, en muchos casos, eliminarla. En términos de justicia social, todavía falta mucho camino, pero 53 millones de

latinoamericanos sufriendo hambre debería ser una motivación suficiente para comenzar a recorrerlo.

De todas maneras, pese a la evidencia, parece que sigue siendo necesario explicar que *es* injusto morir de hambre y *por qué* es injusto morir de hambre, al menos en vista de los hechos y de la pasividad de las políticas mundiales al respecto. O, como invita el último reclamo de la FAO, a gritarlo, a indignarnos, a ponernos furiosos y mostrar nuestro enojo.

No sólo vivimos en un mundo profundamente desigual y empobrecido, sino que sabemos que cotidianamente hay seres humanos que viven con hambre y que mueren de hambre. Todos los ciudadanos del mundo somos concientes, en menor o mayor medida, de ello y, sin embargo, continuamos con el desarrollo de nuestras vidas haciendo abstracción de estas situaciones desesperantes. Algunos, en una muestra de sensibilidad, se manifiestan en contra de la guerra a Irak o Afganistán. Se indignan y duelen ante la todavía abierta cárcel estadounidense en Guantánamo, los ataques al pueblo palestino, los atentados del 11S y del 11M, las matanzas en Ciudad Juárez ... y tantos otros acontecimientos atroces e injustos. Pero no tiene el mismo eco el hambre que padecen millones de personas en el mundo. Son millones de seres humanos que viven con hambre y mueren de hambre, bombardeados por el hambre (también injustamente como en Irak o Afganistán), presos y sometidos a la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de la pobreza y el hambre (también injustamente como están los presos en Guantánamo), atacados y diezmados en sus cotidianidades y despojados de sus vidas y sus habidad (como malvive el pueblo palestino) y cruelmente asesinados (como todas las personas víctimas del 11S, del 11M y las que todavía siguen muriendo en Ciudad Juárez).

¿Por qué, entonces, la reacción es tan diversa? ¿Por qué seguimos conviviendo con estas torturas y estos asesinatos sin tomar medidas claras y decisivas al respecto? ¿Por qué los ciudadanos no reaccionamos cuando votamos, cuando elegimos democráticamente a nuestros representantes, cuando nos manifestamos, cuando ejercemos la ciudadanía (al menos, los que vivimos en contextos democráticos y podemos hacerlo)? ¿Por qué los que pensamos, estudiamos y escribimos sobre la justicia social seguimos obviando este cotidiano genocidio, al igual que lo hacen los que gobiernan países y organismos financieros internacionales?

La respuesta no sólo está en las claves del modelo político y económico neoliberal capitalista en el que vivimos, sino, esencialmente, en que ejercemos la

ciudadanía, estructuramos la democracia y definimos la justicia de manera que resulte funcional a ese modelo económico y político. Y seguimos pensando, actuando y votando sin modificar los status quo de poder económico mundial y regional. La última de las crisis que todavía estamos atravesando era una oportunidad para modificar el rumbo. Quizá aparezcan otras o se estén gestando otras (como a veces sugieren los nuevos aires políticos latinoamericanos). Pero hay que ser concientes de que llegarán tarde para los que actualmente están muriendo de hambre y para los que el hambre les está mermando capacidades y oportunidades. Que ya no será posible cumplir el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. Según la CEPAL, de 85% de avance que registraba la región en esta materia en 2008 ha caído a 78% en 2009, y algunos países experimentan incrementos en sus niveles de pobreza e indigencia mayores al promedio, como por ejemplo, México, debido a la reducción del PIB y al deterioro de la situación de empleo y salarios. Por primera vez en 6 años la pobreza deja de caer y se incrementa, cosa que ya había sucedido con los niveles de indigencia debido al alza del precio de los alimentos y aumenta el desempleo de manera notable, lo que acarreará mayor pobreza y profundizará la que ya existía. La CEPAL estima que en 2009 hubo entre 9 y 11 millones más de personas en situación de pobreza y 5 millones más de personas en situación de indigencia, con lo que la crisis del 2009 empobreció a alrededor de una cuarta parte de las personas que salieron de la pobreza en el sexenio anterior, unas 41 millones de personas.

América Latina no está condenada a ser pobre, desigual e injusta. No es que no se pueda acabar con la pobreza extrema o que sea imposible como estrategia de política global porque, entre otras cosas, nunca se emprendió *realmente* ese objetivo. No es tampoco una cuestión de carencia de recursos, porque ello tampoco se explica desde los millonarios actuales gastos mundiales en la industria de la guerra, por ejemplo, o el resguardo en términos de derechos de propiedad privada de grandes fortunas (e ineficaces en términos de utilidad marginal del dinero) que poseen algunos frente a la pobreza extrema de otros.

El derecho de los pobres no puede ser un derecho empobrecido. La pobreza tiene que ser rescatada como *el* tema imprescindible para el debate y el estudio político, jurídico, social y económico. Ya no quedan excusas, tenemos que construir una justicia social que realmente pueda acabar con la pobreza extrema y con el hambre. Hay opciones frente al hambre. No es justo ni aceptable ni necesario que haya personas en el

mundo padeciendo hambre y muriendo de hambre. Les debemos respuestas estratégicas y estructurales y que incluyan políticas sociales igualitarias y eficaces. Y tiene que ser urgente.